

Comercio y medio ambiente en los acuerdos regionales

Entre las muchas incógnitas que las relaciones entre el comercio internacional y el medio ambiente presenta, hay una certeza que emerge con fuerza: es cada vez más difícil sostener posiciones sólo reactivas frente al tema, y cada vez más clara la necesidad de asumir una actitud proactiva en la discusión multilateral. Esto no responde a la pregunta sobre la conveniencia de establecer vínculos formales en los regímenes comerciales con las cuestiones ambientales. Más bien plantea otras cuestiones previas: ¿están nuestros países preparados para la discusión? ¿En qué medida han analizado e interiorizado el tema? ¿Qué suerte pueden correr las preocupaciones ambientales en las negociaciones en un foro comercial si no hay una clara comprensión de los intereses que se deben perseguir y las implicancias de la vinculación o desvinculación formal entre comercio y medio ambiente? Las respuestas a estos interrogantes aún no están claras, y son claves a la hora de juzgar sobre la integración de lo ambiental en el marco de las próximas negociaciones multilaterales – aspiración que EE.UU., la UE, Japón y otros países manifiestan cada vez con más énfasis.

Una forma de comenzar a responder es mirar a otros contextos comerciales - los acuerdos regionales. Este trabajo de estudio comparativo ya se ha iniciado. En febrero de este año, el ICTSD organizó un simposio en el que se presentaron las diversas experiencias en el mundo en esta materia, cuyas memorias de próxima publicación serán de gran ayuda para extraer conclusiones. Sin pretender responder a las preguntas arriba planteadas, pero buscando clarificar algunos de sus presupuestos, en este número de PUENTES queremos aportar a nuestros lectores elementos de análisis y juicio. En este artículo pasamos breve revista de los arreglos institucionales para el tratamiento de las cuestiones ambientales en los principales acuerdos de la región; por su parte, el artículo de pág. 3 nos presenta un análisis comparativo de la inclusión de la cuestión ambiental en regímenes de distintas partes del mundo, y presenta valiosas conclusiones. Finalmente, el artículo de pág. 5 hace una crónica de cómo entró el tema en las negociaciones y los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ilustrándonos sobre los actores, tensiones y argumentos que la discusión ha provocado.

El tema ambiental en la agenda regional

El tema ambiental lleva varios años de presencia en los procesos de integración regional. La protección ambiental ha sido, por ejemplo especialmente importante para aquellos países que poseen extensas fronteras que se ven amenazadas por la contaminación transfronteriza. En la actualidad, negociar niveles de protección ambiental común se ha convertido en una estrategia de desarrollo económico y social.

Aunque con matices, no hay duda de que la atención política que el tema despierta va en aumento, en especial en las negociaciones entre bloques comerciales, como las que se desarrollan entre el TLCAN y terceros países que aspiran a integrar el bloque, y en las futuras negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (el Plan de Acción que resultó de la reciente cumbre de mandatarios de América Latina y la Unión Europea incluye importantes apartados sobre la temática ambiental).

Pasemos breve revista de cómo los acuerdos regionales existentes tratan el tema aunque sin analizar cómo estos arreglos institucionales han funcionado efectivamente.

Mercosur: metas ambiciosas

El Tratado de Asunción hace una referencia explícita al tema ambiental al mencionar que el objetivo de integración de los mercados “debe ser alcanzado mediante el eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio”.

La preocupación por la cuestión ambiental surgió con la creación misma del bloque. Ya en junio de 1992 se realizó la primera Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Mercosur, en la que se trataron temas relacionados a las normas ISO 14000 y estudios de impacto ambiental para proyectos transfronterizos. En 1993 se convocó a la primera Reunión Especializada de Medio Ambiente (REMA), a dos años del inicio de los Subgrupos de Trabajo. En 1995 comenzó a funcionar el Subgrupo No. 6 sobre Medio Ambiente, que teniendo en cuenta el anterior trabajo de la REMA estableció algunas tareas prioritarias: 1) armonización o eliminación de restricciones no arancelarias con componentes ambientales; 2) promoción de estudios para valorar e incluir los costos ambientales en los costos totales para hacer ecuánimes las condiciones de protección ambiental y competitividad; 3) atención de aspectos ambientales tratados por los subgrupos de energía, agricultura e industria; 4) elaboración de un documento jurídico para optimizar la aplicación de mecanismos legales ambientales en cada país; 5) diseño y puesta en marcha de un sistema de información ambiental; y, 6) definición y formalización de un sello verde en la región.

El avance más esperado ha sido el borrador de Protocolo sobre Medio Ambiente que fue aprobado por el Subgrupo en 1997 y que todavía no es adoptado de manera definitiva. El Protocolo Ambiental del Mercosur incluye un amplio espectro de temas (áreas naturales, biodiversidad, bioseguridad, certificación ambiental y control), y en la actualidad se ha avanzado significativamente en estudios preliminares sobre la armonización de las normas de protección ambiental entre los países de la región.

Comunidad Andina: logros moderados

La Comunidad Andina cuenta ya con normativa supranacional sobre temas específicos como los recursos genéticos (Decisión 391) y las variedades vegetales (Decisión 344). Además cuenta con un órgano de coordinación intergubernamental, el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM), y más recientemente con una estrategia de biodiversidad para toda la Comunidad. Si bien estos son logros modestos, en las recientes Declaraciones presidenciales el tema ambiental ha estado siempre presente.

La creación del CAAAM demuestra la necesidad de coordinar políticas y normas ambientales al más alto nivel. La CAAAM tiene el mandato de asesorar y apoyar a la Secretaría General en mate-

EN ESTA EDICION

| | |
|---|----|
| Comercio y medio ambiente en los acuerdos regionales | 1 |
| Experiencias de cooperación ambiental en acuerdos de integración regional | 3 |
| Comercio y medio ambiente en el TLCAN | 5 |
| Noticias OMC | 7 |
| Mecanismo de Solución de Diferencias | 9 |
| Noticias Regionales | 11 |
| Organizaciones Internacionales | 12 |
| AMUMA | 13 |
| Eventos y Publicaciones | 16 |

rias como política comunitaria sobre medio ambiente y el seguimiento, aplicación y cumplimiento integral de las Decisiones y normas complementarias en materia ambiental. A pesar de que las decisiones del Comité no comprometen al país miembro, es un espacio que congrega para la discusión de los temas ambientales más importantes para la región.

Adicionalmente se creó el Comité de Recursos Genéticos (Decisión 391) y el Comité de Expertos en Variedades Vegetales (Decisión 345), que tienen en sus agendas temas importantes como las implicaciones del Artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (ADPIC) en la Región Andina, y preparan estrategias comunes en torno al tema. Estos Comités informan periódicamente de sus labores al CAAAM.

Mercado Común Centroamericano

En el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana los miembros del MCCA consideran que la ampliación de sus mercados nacionales a través de la integración, es un requisito necesario para impulsar el desarrollo, basándose en los principios de solidaridad, reciprocidad y equidad, mediante un adecuado y eficaz aprovechamiento de todos los recursos y la preservación del medio ambiente, entre otros.

En el Artículo 26 de dicho Protocolo los Estados se comprometen a armonizar y adoptar normas y reglamentos técnicos comunes de mercado que se dirigirán únicamente a satisfacer los requerimientos para la protección de la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento de estándares mínimos de calidad. De igual forma en el Artículo 35 referente a los recursos naturales y el medio ambiente, los Estados convienen en desarrollar estrategias comunes con el objetivo de fortalecer su capacidad para valorar y proteger el patrimonio natural y adoptar patrones de desarrollo sostenible, mediante el mejoramiento y armonización regional de la legislación ambiental y el financiamiento y la ejecución de proyectos de protección del medio ambiente.

Posteriormente en la Cumbre Presidencial de Costa del Sol, El Salvador, de febrero de 1989, los presidentes del MCCA convinieron en la creación de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); asimismo, en la Cumbre Presidencial realizada en San Isidro Coronado, Costa Rica, en diciembre de 1989, los presidentes suscribieron el Convenio Centroamericano para la Protección del Medio Ambiente. La CCAD tiene como objetivos primordiales proteger la biodiversidad de la región, establecer un vínculo de colaboración entre los países para buscar conjuntamente la adopción de estilos de desarrollo sostenible buscando la participación de todas las instancias concernidas

por el desarrollo, promover acciones coordinadas entre las entidades gubernamentales e internacionales para utilizar de forma óptima y racional los recursos naturales del área, y buscar acciones destinadas al control de la contaminación y búsqueda de esfuerzos para restablecer el equilibrio ecológico.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte: un salto significativo

El TLCAN es el primer acuerdo regional en abordar frontalmente el tema ambiental, pues manifiesta como objetivos del Acuerdo el alentar la protección del medio ambiente en el territorio de las partes para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, y promover el desarrollo sostenible a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en las políticas ambientales y económicas; incrementar la cooperación para conservar proteger y mejorar el medio ambiente; evitar la creación de distorsiones o barreras al comercio; y mejorar las leyes, reglamentos, políticas y prácticas ambientales.

Hay algunos aspectos de la relación comercio-medio ambiente en este marco que merecen ser destacados: a) La posibilidad de usar sanciones comerciales como medio para forzar el cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales; b) La referencia a si los estándares ambientales nacionales sobre procesos de producción, al ser diferentes entre los países, podrían ser aplicados a los productos importados, para lo cual se estudian mecanismos de supervisión y ejecución de los estándares de producción acordados entre los Estados; c) La referencia a los efectos sobre el mercado y los flujos de inversión de los diferentes niveles de regulaciones ambientales nacionales y el nivel de cumplimiento de las mismas, y de cómo estos efectos pueden ser atenuados o incluso evitados; d) En materia de resolución de controversias, en contraste con el GATT/OMC, coloca la carga de la prueba en las partes que alegan las razones comerciales, forzándolas a demostrar que la medida adoptada por alguno de los tres países es inconsistente con las obligaciones ambientales.

Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Al interior del ALCA el tratamiento abierto del tema ambiental podría convertirse en un elemento de negociación que demore la conclusión de los Acuerdos, y por el momento hay una fuerte resistencia de los países de América Latina a incluirlo. La amenaza del proteccionismo no ha permitido hasta el momento flexibilizar las posiciones, y el tema ambiental es tratado actualmente de forma marginal al interior del Comité de Representantes Gubernamentales para la Sociedad Civil.

Continúa en la página 15

| CAN | MERCOSUR | MCCA | TLCAN | ALCA |
|--|--|---|---|---|
| Estructura: Consejo Presidencial Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores Comisión de la CAN Secretaría General Tribunal de Justicia Parlamento Andino Consejo Consultivo Empresarial | Estructura: Consejo del Mercado Común (CMC) Grupo del Mercado Común (GMC) Comisión de Comercio Comisión Parlamentaria Conjunta Foro Consultivo Económico y Social Secretaría Administrativa | Estructura: Consejo Ejecutivo Secretaría General Consejo Económico Consejo Ejecutivo | Estructura: Secretariado General (formado por las secciones nacionales de cada parte) Comisión de Libre Comercio Consejo Ministerial Secretariado Secretaría de Coordinación | Estructura: Nueve grupos de negociación: acceso a mercados, inversión, servicios, adquisiciones gubernamentales, solución de diferencias, agricultura, propiedad intelectual, subsidios-antidumping y derechos compensatorios, y, políticas de competencia. Un Comité de Negociaciones Comerciales vigila el proceso con el apoyo de una Secretaría Tripartita compuesta por la CEPAL, el BID, y la OEA. Autoridad Ambiental: A través del Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Sociedad Civil se canalizan temas ambientales. |
| Autoridad Ambiental: Comité Andino de Autoridades Ambientales | Autoridad Ambiental: Subgrupo de Medio Ambiente que funciona al interior del GMC. Adicionalmente cada parte cumplirá de forma individual con lo dispuesto en el Protocolo sobre Medio Ambiente | Autoridad Ambiental: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) creada en 1989 | Autoridad Ambiental: El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) creó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) formado por el Consejo, el Comité Consultivo Público Conjunto y un Secretariado. | |

Experiencias de cooperación ambiental en acuerdos de integración regional

Por Joern Altmann

La siguiente es una síntesis de los resultados preliminares de un estudio que la Agencia de Protección Ambiental de Alemania encargó sobre la integración de aspectos ambientales en los acuerdos regionales de libre comercio.

El estudio partió de la base de que los acuerdos de integración (libre comercio) regional deben integrar medidas de política ambiental por dos razones:

- **Razones ambientales:** La cooperación ofrece mejores soluciones para los problemas ambientales compartidos (contaminación transfronteriza, incendios forestales, protección de bosques tropicales), así como instrumentos para enfrentar los problemas ambientales nacionales, como el intercambio de información. Es más fácil lograr compromisos mutuos para la solución de problemas ambientales globales en negociaciones regionales que multinacionales.
- **Razones económicas:** La llamada segunda agenda de política ambiental – la liberalización y la regulación sectorial y sus impactos en el medio ambiente – exige una dimensión regional. La inclusión de la protección ambiental en otros sectores es relativamente novedosa y el impacto económico de la liberalización comercial en los acuerdos de integración regional ha sido muy poco estudiado. En muchos acuerdos la liberalización comercial sólo está comenzando y por lo tanto los resultados económicos no pueden evaluarse. La regulación de las ventajas competitivas basadas en la diferencia de estándares ambientales es otra razón crucial para contar con una política ambiental regional.

Los acuerdos objeto del estudio fueron: Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Área de Libre Comercio de Europa Central y Oriental (CEFTA), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercosur, la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Mercado Común y Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Asociación del Sur Asiático para la Cooperación Regional (SAARC), la Comunidad Sudafricana de Desarrollo (SADC), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS), el Acuerdo de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), el Acuerdo de Lomé (UE-ACP) y la Zona de Libre Comercio del Mediterráneo (MFTZ).

Clasificación de acuerdos de integración regional

Los acuerdos de integración regional no sólo consisten en una agenda económica, fundamentalmente un acuerdo de liberalización comercial, sino que también incluyen un importante componente de cooperación política. Los acuerdos de libre comercio son parte de una estrategia económica orientada a la exportación y el acceso a los mercados. Las ventajas políticas de la integración regional consisten en negociaciones mejor coordinadas, merced al número limitado de participantes, la mayor credibilidad de los socios y una cultura política común.

La UE, el acuerdo UE-Lomé, Mercosur e incluso APEC se orientan hacia la cooperación en muchos campos de políticas. La reducción de las tensiones políticas y la promoción de la cooperación son los principales propósitos de los acuerdos de integración regional como ASEAN, SAARC o SADC.

Estructura organizativa

La liberalización comercial y la cooperación política pueden ser tarea de una sola organización, como en la UE, o de organizaciones distintas creadas en diferentes acuerdos con propósitos comerciales y de cooperación política, como en el caso del TLCAN o en América Central.

Por otra parte, diferentes objetivos de integración regional requieren diferentes tipos de organización, básicamente: 1) Instituciones supranacionales con legislación supranacional (UE); 2) Instituciones comunes y acuerdos vinculantes (NAFTA, UE-Lomé, SADC); 3) Reuniones Ministeriales y acuerdos no vinculantes (Mercosur, APEC, ASEAN).

La mayoría de los acuerdos regionales muestran un bajo grado de compromiso político e integración, resultando en estructuras organizativas dispersas, y el predominio de acuerdos vinculantes “blandos” y acuerdos no vinculantes.

Protección ambiental

Existen compromisos políticos de protección ambiental a nivel regional integrados como objetivos en casi todos los acuerdos más recientes, incluso en los acuerdos entre países en desarrollo. En los acuerdos más débiles, como el SAARC, es sólo un objetivo general, ya que carecen de instituciones o instrumentos para implementarlos. En la UE, TLCAN y América Central, la protección ambiental tiene una importancia relativamente alta en el proceso regional.

El interés regional por la protección ambiental se basa en la conveniencia de proteger y utilizar recursos comunes y enfrentar la contaminación transfronteriza (ASEAN, TLCAN, América Central) y asegurar un compromiso mutuo de implementación de acuerdos multilaterales (TLCAN, APEC, UE, Mercosur).

Los países industrializados, especialmente en acuerdos norte-sur, buscan proteger estándares ambientales mínimos, en tanto que los países en desarrollo buscan transferencias tecnológicas y de otros tipos para mejorar los estándares ambientales y el acceso al mercado de los países industrializados. Adicionalmente, los países en desarrollo pueden utilizar las ventajas políticas de la integración regional para mejorar su poder de negociación frente a los países que no son parte del acuerdo.

Los estándares ambientales regionales son objetivos de calidad ambiental y regulaciones obligatorias conjuntas. Sólo existen en la UE, ya que requieren altos niveles de coordinación e integración política. Si adoptamos una definición más amplia de estándar ambiental regional y consideramos como tal a los acuerdos sobre qué bienes ambientales son protegidos y las correspondientes regulaciones, estos estándares existen en varios acuerdos.

Los bienes ambientales regionales han sido incluidos en la mayoría de los acuerdos dado que existen serios problemas de contaminación transfronteriza o de explotación de recursos. Estos bienes incluyen los bosques tropicales (como en los países ASEAN y de América Central), y el aire y el agua en zonas fronterizas. Los acuerdos sobre bienes ambientales regionales surgen porque estos problemas sólo pueden ser resueltos a través de la cooperación. Los acuerdos usualmente incluyen sólo problemas urgentes en los que todos los países miembros tienen un interés.

Los bienes ambientales nacionales y globales están menos protegidos en los acuerdos regionales de integración. A excepción del TLCAN y la UE, los bienes ambientales nacionales son protegidos sólo por normas nacionales. Por su parte, los bienes ambientales globales se listan como objetivos de protección ambiental en la UE, UE-Lomé, TLCAN (capa de ozono) y APEC (océanos), entendiéndose la protección como la aplicación de acuerdos ambientales multilaterales.

Cooperación Política

Las políticas ambientales regionales reflejan la capacidad de los estados miembros. El proceso de cooperación política generalmente se es-

Continúa en la página 4

estructura en tres etapas: diálogo político, negociación de objetivos y regulaciones principales, creación de instituciones.

El diálogo político para el intercambio de información se da en la mayoría de los acuerdos. Los objetivos y las regulaciones principales, que consisten mayormente en soluciones para problemas ambientales seleccionados, en general están en negociación.

Instituciones e instrumentos

En contraste con lo que ocurre a nivel multilateral, existen a nivel regional instituciones para la protección ambiental. El propósito y la estructura de cada acuerdo determinan el nivel de cooperación ambiental. Normalmente, la política ambiental se organiza y regula de la misma forma que otras áreas políticas (comercio, transporte, agricultura, etc.). Como se dijo, la mayor parte de los acuerdos regionales muestran un bajo nivel de compromiso e integración, que se refleja en una estructura organizativa dispersa. Las instituciones van desde reuniones ministeriales regulares al mero intercambio de información, y en general, cuando se establecen instituciones adicionales, estas no pueden obligar a los Estados miembros a aplicar los acuerdos. Instituciones de trabajo permanente existen en la UE, TLCAN, SADC y ECOWAS.

Por otra parte, la mayoría de los acuerdos apoyan la aplicación y el desarrollo de políticas nacionales o la aplicación de acuerdos multinacionales. La existencia de acuerdos sobre la aplicación de políticas internas representa una ventaja política de la integración regional que se usa en gran medida. El TLCAN y la UE promueven la aplicación de políticas nacionales para resolver problemas ambientales globales, nacionales y regionales. En la UE, la política ambiental de los miembros está coordinada y se aplica una política ambiental común. SADC, SAARC y Mercosur apuntan a coordinar políticas ambientales nacionales.

La participación de la sociedad civil en la política ambiental regional es muy limitada. Las organizaciones de la sociedad civil pueden ser consultadas, como en el TLCAN y la UE. En ambos regímenes se publican informes que mejoran la transparencia del proceso de toma de decisiones.

La integración de la protección ambiental en estos acuerdos se ha producido principalmente en aquellos dominados por países industrializados (UE, TLCAN). En el marco de estos se ejecutan ya programas de desarrollo y proyectos que van más allá de la política de información o

que aplican instrumentos de política más sofisticados. Los instrumentos relacionados con el comercio que requieren mayor coordinación, como el ecoetiquetado o las auditorías, se aplican también en acuerdos dominados por países industrializados. En otros acuerdos, estos instrumentos están todavía siendo analizados.

Los acuerdos sur-sur, que ofrecen menores niveles de integración, se caracterizan por el intercambio de información, las consultas y los proyectos conjuntos. Los mecanismos de información y consulta son principalmente reuniones ministeriales regulares. Los proyectos y programas conjuntos en general se relacionan con problemas ambientales transfronterizos. La cooperación técnica y la transferencia de tecnología ambiental son parte de los acuerdos norte-sur.

Regulación indirecta de la protección ambiental

La regulación indirecta de la protección ambiental ocurre en áreas de política que tienen impacto sobre el medio ambiente, como la agricultura, la pesca, la minería o el transporte. La incorporación de la protección ambiental en las políticas sectoriales ocurre en la UE, UE-Lomé y está reconocida en APEC. En todos los demás acuerdos los vínculos entre la política económica y la ambiental no están explícitamente tomados en cuenta.

La liberalización de sectores que tienen un impacto sobre el medio ambiente ha avanzado más en los acuerdos regionales que en el plano multilateral. Se pueden determinar los resultados económicos de unos pocos acuerdos, dado que en muchos el proceso aún no se aplica, o la existencia de un gran número de excepciones impiden la eliminación de aranceles. Así, resulta difícil identificar los efectos de la liberalización comercial en el medio ambiente.

Conflictos entre el comercio y el medio ambiente a nivel regional

El 'clásico' conflicto entre comercio y medio ambiente juega un papel menos importante en la integración regional que en las negociaciones multilaterales. El conflicto entre comercio y medio ambiente que domina las discusiones políticas parte de dos premisas: 1) los estándares ambientales bajos generan competencia desleal; 2) los estándares ambientales altos se utilizan como barreras ambientales.

Esto tiene sus impactos sobre el rol de la regulación de la competencia a nivel regional: sólo juega un papel en acuerdos relativamente estables dominados por países industrializados. La regulación de la competencia está incluida en la UE y el TLCAN, donde la competencia entre países miembros es intensa. Los mecanismos de solución de diferencias se establecen si las políticas para la regulación de mercados están institucionalizadas. En los demás acuerdos, las diferencias se negocian directamente.

Conclusiones

El estudio permite concluir que los estándares ambientales regionales se establecen independientemente de lo comercial; que la cooperación regional ofrece oportunidades para la cooperación política y el establecimiento de estándares ambientales regionales para el manejo ambiental o el ecoetiquetado. Estas oportunidades de integración regional para promover la cooperación política se utilizan en el campo ambiental, aunque escasamente.

Las perspectivas de una incorporación más profunda de las cuestiones ambientales en los acuerdos de integración regional requiere de mayor investigación. También se debe poner más énfasis en situaciones de sinergia entre lo económico y lo ambiental, desde el mejoramiento de los procedimientos de negociación de acuerdos hasta el desarrollo de esquemas de compensación.

El Dr. Joern Altmann es profesor del Instituto Internacional de Economía y Medio Ambiente en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Bochum, Alemania. Ponencia presentada en el Simposio "Política Comercial y Sostenibilidad: propuestas regionales" organizado por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) en Ginebra el 1 y 2 de febrero de 1999.

| Instrumentos para la cooperación ambiental | |
|---|--|
| Instrumento | Acuerdo |
| Información y consultas | ASEAN, APEC, UE, TLCAN, MCCA, Mercosur |
| Participación | UE, TLCAN |
| Transparencia (informes ambientales) | UE, TLCAN |
| Evaluaciones de Impacto Ambiental de la Integración | UE, TLCAN |
| Revisiones de la Política Comercial | |
| Evaluaciones de Impacto Ambiental de proyectos y programas | UE, TLCAN, SADC, UE-Lomé |
| Creación de instituciones | ASEAN, APEC, SADC |
| Educación ambiental | UE, TLCAN |
| Sistemas de Información Ambiental | UE, TLCAN, ASEAN, Mercosur (en consideración), SADC? |
| Planes de acción ambiental | UE, APEC, ASEAN, MCCA |
| Ecoetiquetado | UE (regional), NAFTA (nacional), Mercosur (en consideración) |
| Auditorías ambientales | UE (regional), TLCAN (nacional), Mercosur (en consideración), APEC |
| Transferencia de tecnología | UE, UE-Lomé, APEC |
| Cooperación técnica y financiera (ambiental) | UE-Lomé, TLCAN |
| Cooperación para resolver problemas ambientales seleccionados | UE, TLCAN, ASEAN, MCCA, SADC, UE-Lomé, ECOWAS |
| Solución de diferencias | UE, TLCAN (CCA) |

Comercio y medio ambiente en el TLCAN: Crónica de una negociación

Por Ana Karina González

El vínculo entre la liberalización comercial y la protección del ambiente se convirtió en un tema de debate transnacional muy temprano en el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Organizaciones no gubernamentales (ONG) norteamericanas manifestaron sus preocupaciones en torno a los efectos ambientales que del tratado comercial con México se pudieran derivar. En especial, las organizaciones ubicadas en la frontera diseminaron información sobre los desastrosos efectos ambientales de procesos anteriores de liberalización con Estados Unidos, refiriéndose específicamente al sector de la maquila. Estas críticas fueron retomadas por los medios masivos de comunicación. Sólo unos meses después de la declaración sobre la iniciación de un proceso de liberalización, la "laxa" política ambiental mexicana pasó de ser un tema de baja prioridad política a un tema de alta prioridad en la agenda de América del Norte.

Inicialmente, la reacción a las críticas de los ambientalistas fue predominantemente gubernamental, con el consenso del sector privado involucrado en el proceso, mismo que reaccionaría activamente en etapas posteriores.

La posición de los promotores del TLCAN sobre la política ambiental estuvo basada en una primera instancia sobre argumentos generales en el sentido de que el libre comercio era beneficioso para el medio ambiente: el comercio genera crecimiento económico y el crecimiento económico permite una mejor protección del medio ambiente. Durante el debate, dependiendo del ponente, las circunstancias y la audiencia, la relación entre comercio y medio ambiente era presentada simplemente como una relación causal o como una interacción más compleja. Por ejemplo, el entonces Ministro de Comercio, Jaime Serra Puche, simplemente afirmó ante el Senado de la República que a mayor desarrollo económico, mejor protección del medio ambiente. El entonces Ministro de Desarrollo Social (encargado de la política ambiental), Luis Donaldo Colosio afirmó que la liberalización comercial y la protección del ambiente van mano a mano y que el TLCAN incrementaría la sensibilidad hacia el medio ambiente. Por su parte, el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, más cauto, afirmó que la liberalización comercial representaba una oportunidad para una mejor protección del medio ambiente y que ésta debía ser acompañada de una política adecuada.

Por otro lado, la administración Bush defendió al TLCAN con argumentos similares, el más convincente de ellos siendo que el incremento de recursos y de acceso a la tecnología producto del crecimiento económico beneficiaría a la protección ambiental. "México ha manifestado un compromiso serio con la protección y el mejoramiento del estado del medio ambiente, para lo que el mayor obstáculo es la disponibilidad de recursos económicos, y no la generación de estándares o la aplicación de los mismos."

En pocas palabras, los promotores del TLCAN presentaron el acuerdo como la solución para las debilidades de la política ambiental mexicana.

Los promotores rechazaron las propuestas de las ONG de incorporar al Tratado disposiciones para el financiamiento de proyectos ambientales, dado que la vinculación del comercio con la protección ambiental podría traducirse en nuevas barreras al comercio, y además éstas se harían extensivas a futuros nuevos integrantes del Tratado.

Para contrarrestar estas propuestas, el gobierno mexicano mantuvo la postura de que una economía mexicana fuerte sería la mejor forma de crear recursos para el mejoramiento ambiental. En resumen, la protección del ambiente fue presentada fundamentalmente como un problema de falta de recursos, que la expansión económica contribuiría a resolver. Acorde con esta postura, la política del gobierno mexicano para la defensa del TLCAN en contra de los críticos del mismo, se abocó a contrarrestar la pobre imagen que de México se había generado en Estados Unidos: discursos, boletines de prensa, publicaciones etc., resaltando los avances de México en política ambiental.

Al interior de México, donde la propaganda a favor del TLCAN fue fuerte y las críticas por parte de los ambientalistas no recibieron suficiente atención pública, el esfuerzo por contrarrestar los argumentos en contra del Tratado fue mucho menor: fundamentalmente el gobierno se limitó a hacer algunas declaraciones que fueron retomadas en los medios masivos de comunicación y a generar información de mucha menor calidad que aquella utilizada para revertir la percepción que de México se tenía en Estados Unidos.

(...) Los promotores del TLCAN presentaron el acuerdo como la solución para las debilidades de la política ambiental mexicana.

Durante el debate ambiental en el marco de las negociaciones del TLCAN, las relaciones regionales y la cooperación ambiental a nivel gubernamental, así como entre organizaciones no gubernamentales se fortalecieron, pero también se observó el surgimiento de diferencias, sobre todo durante la última etapa del proceso, cuando se negoció el Acuerdo Paralelo al TLCAN en materia de Cooperación Ambiental.

Los intereses económicos y puntos de vista sobre el desarrollo y el crecimiento económico unieron a los gobiernos y a la iniciativa privada de México, Estados Unidos y Canadá, junto con el Banco Mundial, en una alianza en apoyo al TLCAN.

Hasta la finalización de las negociaciones del tratado en el verano de 1992, esta alianza transnacional en general estuvo de acuerdo en cómo se debían integrar los asuntos relacionados con el medio ambiente al acuerdo comercial.

Este consenso se terminó cuando el Presidente norteamericano entrante, William Clinton, demandó la negociación de acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral, hecho que tensó las relaciones entre los promotores del TLCAN. Los gobiernos mexicano y canadiense se mostraron desde el inicio reticentes a negociar acuerdos paralelos, y más aún a la renegociación del texto del Tratado. México en especial se encontraba en una situación problemática dado que el TLCAN representaba una pieza fundamental de su estrategia económica, y para conseguir su aprobación por parte del Congreso estadounidense debía aceptar demandas cuyo trasfondo era el de atender a las preocupaciones del público estadounidense sobre la integración económica con México.

La sólida relación y cooperación con Estados Unidos no fue suficiente para evitar el sentido de desconfianza que adoptaron los negociadores mexicanos. Ello enfatizó su actitud cauta y de reserva sobre el proceso de negociación. México siempre estuvo incómodo con las críticas a su aplicación laxa de la política ambiental, y ello empeoró al ser forzados a acceder a mayores concesiones a través de la negociación de los acuerdos paralelos.

¹ Entrevista personal, Regina Barba, Unión de Grupos Ambientalistas de México, marzo de 1999

Esta negociación hizo aún más evidente la asimetría e inequidades imperantes entre Estados Unidos y México. El contenido final de los acuerdos respondió en parte a los intereses norteamericanos de asegurar la aplicación de la legislación ambiental y la gestión de la política ambiental en México. La incorporación de sanciones comerciales y la creación de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que permiten el control de la aplicación de la legislación de cada uno de los países y cierto grado de participación de la sociedad civil, fueron aceptados por México con mucha dificultad.

Cabe recordar que, durante el debate, algunos miembros del Congreso estadounidense querían introducir sanciones comerciales como la pena máxima resultante de un proceso de solución de controversias sobre la falta de aplicación de la legislación ambiental por parte de alguno de los países miembros o su industria. En un primer momento, los gobiernos canadiense y mexicano se opusieron a las sanciones comerciales. De hecho, el asunto de las sanciones comerciales fue el más delicado para el gobierno de México, e incluso para las organizaciones civiles mexicanas¹ durante el curso de las negociaciones de los acuerdos paralelos. Lo anterior debido a la percepción del potencial abuso por parte de EE.UU. de las sanciones comerciales por razones económicas, veladas por la protección ambiental, como había sucedido en el caso atún - delfín. Asimismo, tanto el gobierno mexicano como el canadiense y, a partir de la administración Clinton, la iniciativa privada estadounidense, se opusieron a una comisión con poderes supranacionales, a los impuestos ambientales y a la armonización de estándares ambientales, principalmente.

Las negociaciones de los acuerdos paralelos fueron largas y problemáticas debido principalmente a cuatro factores: 1) la razón detrás de la negociación de los acuerdos tenía que ver fundamentalmente con asuntos de política interna de Estados Unidos, y como consecuencia, ninguno de los equipos negociadores estaba convencido o motivado para establecer los acuerdos paralelos. 2) Dado que la aprobación del TLCAN dentro del Congreso estadounidense no estaba asegurada, la presión sobre los negociadores era más que la usual. 3) Las demandas norteamericanas contrastaban de manera importante con las posiciones negociadoras de México y Canadá. 4) No había antecedentes internacionales de acuerdos paralelos a tratados comerciales.

Los asuntos más problemáticos durante la negociación fueron los relacionados con la resolución de controversias y la autoridad de la Comisión Trinacional, ambos atentatorios a la soberanía nacional de acuerdo a la percepción de los gobiernos mexicano y canadiense.

Por otro lado, todas las posturas estadounidenses que claramente reflejaban las peticiones de las ONG ambientalistas moderadas eran contrarias a la posición negociadora mexicana, en particular: la autonomía del Secretariado de la Comisión; la posibilidad por parte de ciudadanos de presentar peticiones a la Comisión, así como la posibilidad de investigar las peticiones ciudadanas; la creación de un Comité Asesor Público regional; el acceso del público al Comité de la Comisión, y el derecho a la información por parte de los ciudadanos y transparencia.

Reacciones a los acuerdos paralelos

En México, había una percepción generalizada de que los negociadores mexicanos habían hecho concesiones inaceptables. En particular, la posibilidad de que se impusieran sanciones comerciales a México fue percibida como un atentado en contra de la soberanía nacional.

Para aminorar los efectos de los ánimos contrarios a lo que se había conseguido negociar, en declaraciones públicas, tanto el entonces pre-

sidente Salinas como el Ministro de Comercio afirmaron que la soberanía nacional estaba garantizada en el marco de los acuerdos paralelos. Aseguraron que era muy poco probable que se aplicaran sanciones comerciales a México dada la complejidad del procedimiento de resolución de controversias. Además, hicieron énfasis en las ventajas ofrecidas por el Acuerdo en materia de cooperación ambiental.

México tuvo que ceder en la creación de un Comité Asesor Público regional, consiguiendo que los comités nacionales fueran opcionales. Por otro lado logró limitar los rubros de transparencia y acceso al público.

Si bien los gobiernos mexicano y canadiense hicieron concesiones en los acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental, la ratificación por parte del Congreso estadounidense del paquete negociado por parte del Congreso estadounidense no estaba asegurada. Se presentó la necesidad de intensificar el cabildeo. Finalmente, el 17 de noviembre

de 1993 la Cámara de representantes aprobó el paquete mediante una votación de 234 a 200 votos. El 20 de noviembre el Senado aprobó el paquete con 61 a 38 votos. El TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Algunas conclusiones

De esta reseña del proceso de negociación del TLCAN se desprenden tres elementos importantes que merecen ser destacados:

- a) la negociación del TLCAN representó una pieza fundamental para el proyecto de reestructuración económica de la administración salinista, hecho por el que se le confirió una alta prioridad, destinando una gran cantidad de recursos humanos y materiales a la consecución exitosa de la misma. Lo anterior, aunado a los tiempos políticos que impusieron un sentido de urgencia a la conclusión de las negociaciones y la oposición al tratado por parte de sectores estadounidenses principalmente, generaron un estado de tensión adicional en los negociadores;
- b) la introducción de las preocupaciones ambientales por parte de organizaciones no gubernamentales norteamericanas puso en peligro la consecución del TLCAN, condicionándolo a demandas que fueron percibidas por los negociadores mexicanos como asuntos internos e intereses de sectores norteamericanos. Ello aumentó aún más la tensión de los negociadores y afectó los lazos de colaboración entre grupos negociadores;
- c) la negociación de los acuerdos paralelos representó para los negociadores mexicanos una concesión política necesaria, en contra de su voluntad, para conseguir que pasara el paquete del TLCAN en el Congreso Norteamericano.

Esta historia de presiones y amenazas en la negociación del TLCAN pueden ayudar a explicar por qué la actual administración tiene muy presente que la introducción de elementos ambientales a una negociación comercial distorsiona, obstaculiza e incluso amenaza el proceso y el fin último de la negociación; que la incorporación de elementos ambientales obedece a intereses de organizaciones no gubernamentales y otros actores de países desarrollados, mismos que son recogidos por estos países y promovidos en negociaciones multilaterales. Se conciben como intereses no legítimos que sirven como pantalla al proteccionismo comercial.

Ana Karina González es Coordinadora de Programas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Extracto adaptado del libro "Mexico and the NAFTA Environment Debate" de Barbara Hogenboon de la Universidad de Amsterdam.

Estado de las discusiones para la Ministerial de Seattle

Los objetivos de la próxima ronda de negociaciones multilaterales, que se lanzarán en la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC a celebrarse en Seattle entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, se van clarificando y los Miembros de la OMC esperan comenzar a redactar en septiembre el texto del mandato de negociación que se incluiría en la correspondiente Declaración Ministerial. Pero el proceso promete ser intenso y arduo – ahora queda conciliar objetivos contrapuestos que se encuentran en las más de 60 propuestas presentadas a la OMC. El único punto sobre el que hay un amplio acuerdo es la duración de una eventual Ronda: debe ser corta, de unos tres años.

En la última reunión preparatoria del 29 al 30 de julio, varios Miembros anunciaron que continuarán presentando documentos aún luego de finales de ese mes para cuando se esperaba terminar con esta etapa. Los documentos son colocados en el sitio web de la OMC previa autorización del país que los presenta (www.wto.org/wto/minist/seatdocs.htm). Desafortunadamente la mayoría de los países en desarrollo no dan la autorización, con lo que están disponibles sólo seis meses después de su presentación.

Aplicaciones de acuerdos existentes

La divisoria fundamental está entre aquellos que quieren limitar las negociaciones a la aplicación de los acuerdos existentes y el llamado ‘programa incorporado’ – conjunto de asuntos pendientes y mandatos que dejó la Ronda Uruguay – y quienes prefieren una ronda amplia, que abarque esos y otros temas (un recuento más pormenorizado de esta divisoria fundamental puede encontrarse en *Puentes* Vol. 1 No. 5).

En las reuniones informales del pasado 7 y 8 de junio y 29 y 30 de julio, el Consejo General de la OMC discutió cuestiones relativas a la aplicación de los acuerdos existentes, tema que países como India, Pakistán y Egipto quieren sean el eje de las próximas negociaciones. Un resumen de estas preocupaciones puede encontrarse en un documento informal circulado por Zambia con el apoyo de Jamaica, Kenya, Pakistán, Sri Lanka, Tanzania y Uganda, y que puede obtenerse de estos países.

Propuestas de revisión de acuerdos

India ha presentado cuatro documentos de posición en los que propone la revisión de los acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio y Aplicación del Artículo VI del GATT (que trata sobre medidas antidumping).

Restringir las acciones antidumping aparece como una prioridad para los principales países en desarrollo, a quienes preocupa lo que califican como un recurso abusivo a este tipo de medida por parte de países industrializados. India propone elevar el margen de minimis del Acuerdo Antidumping de tres a cinco por ciento para los países en desarrollo y establecer un período de espera de un año antes de que un producto importado pueda ser nuevamente investigado por las autoridades antidumping. Pero modificar las disposiciones de este acuerdo resultará difícil. El Secretario de Comercio de EE.UU., William Daly, dirigiéndose a un grupo de empresarios el 16 de junio pasado, indicó que “hay un tema que no estamos dispuestos a negociar: las reglas antidumping. Queda mucho trabajo por hacer para poner en vigor el Acuerdo Antidumping existente. Es sumamente complicado, y lo último que queremos es reabrir ese Acuerdo”.

La posición de India sobre el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias es muy similar a la sostenida por países de América Latina: el Acuerdo es favorable a los países desarrollados, ya que subsidios tales como los agrícolas son ‘no recurribles’ ante el mecanismo de solución de diferencias. India anunció que impulsará una expansión de la lista de subsidios ‘no recurribles’ para incluir subsidios que benefician a los países en desarrollo.

Con relación a las medidas sanitarias y fitosanitarias, India argumenta que la aplicación de las mismas a las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo es un grave obstáculo al comercio, y propone la revisión del Acuerdo para otorgar más tiempo a estos países a fin de que ajusten sus medidas sanitarias y fitosanitarias internas. A este respecto, el documento presentado por Zambia propone que, para estar de acuerdo con la OMC, “una norma preparada por una entidad internacional debe considerarse internacional sólo si (i) a lo largo de todo el trabajo técnico de formulación de esa norma y su adopción participó un número mínimo acordado de países de diferentes regiones; y (ii) se adoptó por consenso.”

Agricultura

Un gran número de países apoya los objetivos del Grupo Cairns de reducir/eliminar subsidios gubernamentales para la producción y exportación agrícola. Estas propuestas están dirigidas principalmente a los mercados de la Unión Europea, Japón, Corea, Noruega y Suiza, países que continúan enfatizando la naturaleza multifuncional de la agricultura, lo que justificaría el apoyo gubernamental por motivos sociales y ambientales.

Si bien la mayor parte de los países en desarrollo se han unido en la batalla contra los programas de subsidios de los países industrializados, muchos reclamarán el derecho de otorgar subsidios a actividades agrícolas relacionados con preocupaciones no comerciales, como la seguridad alimentaria. Varios países de América Latina argumentan que los países en desarrollo deberían poder apoyar esfuerzos de mejorar la comercialización, el transporte, la diversificación de la producción agrícola y el cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias. India y Pakistán enfatizan que las disposiciones sobre trato especial y diferenciado deberían cubrir los esquemas de apoyo agrícola de los países en desarrollo. En la reunión del 7 y 8 de junio, India señaló que la ideología de la liberalización comercial no considera las preocupaciones no comerciales de manera adecuada y abogó por una mayor flexibilidad para el apoyo interno a los productores agrícolas de los países en desarrollo.

Por su parte, EE.UU. y Canadá parecen decididos a incluir la biotecnología en las negociaciones (ver *Puentes* Vol. 1 No. 5). Una reciente propuesta de EE.UU. expresa que el marco del Acuerdo sobre Agricultura “debería complementarse con disciplinas adicionales, según se requieran, para enfrentar nuevos desafíos al sector agrícola”. Estos términos sugieren que este país podría intentar concluir un acuerdo autónomo o un conjunto de disposiciones sobre procedimientos de aprobación y etiquetado de productos de la biotecnología.

Servicios

La mayoría de las delegaciones parecen estar de acuerdo en que las negociaciones sobre servicios deben ser amplias y cubrir todos los sectores y formas. En la reunión de junio, India señaló que el Artículo XIX.2 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) contempla la posibilidad de que los países en desarrollo abran menos sectores y liberalicen menos tipos de transacciones.

Australia, Chile y Nueva Zelanda enfatizaron que las negociaciones deben resultar en “compromisos más equilibrados en todas las formas de oferta” incluyendo el movimiento de personas naturales como proveedores de servicios. Esta última es una prioridad para los países en desarrollo promovida en anteriores reuniones preparatorias particularmente por Pakistán.

En un evento relacionado, empresas de EE.UU. involucradas en el mercado energético han formado la Coalición de Servicios Energéticos con el propósito de incluir el tema en las negociaciones sobre servicios de Seattle. Las empresas trabajan con la representante de ese país para las cuestiones comerciales internacionales en la identificación de sectores de servicios energéticos cubiertos por el GATS y aquellos que tendrían que ser incluidos en un anexo separado.

Acuerdos Comerciales Regionales

Tanto países en desarrollo como desarrollados han expresado su preocupación por la falta de claridad en las relaciones entre las normas de la OMC y los acuerdos comerciales regionales. En la reunión del 7 y 8 de junio, muchos Miembros coincidieron en que el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC no está funcionando bien y que el tema debe revisarse por entero. Una propuesta de Japón presentada el 22 de junio resume estas preocupaciones.

Otros temas

En la misma reunión, India enfatizó que las negociaciones sobre el programa incorporado (agricultura y servicios) deben llevarse separadamente de aquellas sobre otros temas y no deben estar condicionadas a avances en otras áreas. India también indicó que la ampliación del ámbito de las negociaciones más allá del programa incorporado le representaría problemas internos.

Inversiones: A pesar de la actividad de movimientos ciudadanos opuestos a un acuerdo multilateral sobre inversiones en muchos países europeos y de América del Norte, la Unión Europea y Canadá apoyan firmemente la negociación de un tratado sobre inversiones dentro de la OMC. Se espera que en breve la UE presente una propuesta detallada sobre cómo desarrollaría que se aborde el tema en la ronda que se iniciaría en Seattle.

También apoyan esta iniciativa los países de Europa oriental que aspiran a ingresar a la UE, Chile, Costa Rica, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Suiza. Brasil hizo saber que podría apoyar estas negociaciones y EE.UU. indicó que apoyaría negociaciones “más modestas” sobre inversiones, lo que algunos observadores interpretan como clarificar y fortalecer algunas disposiciones del Acuerdo sobre Medidas de Inversiones relacionadas con el Comercio. Países como la India, Pakistán y Uganda se opusieron a esta posibilidad, considerándola prematura.

Política de Competencia: En general, los mismos países que apoyan el desarrollo de disciplinas sobre inversiones en la OMC también favorecen la negociación de reglas sobre política de competencia como parte de una nueva ronda, y viceversa – quienes se oponen a la inclusión de inversiones también se oponen a abordar este tema. EE.UU., que enfrenta fuertes presiones internas para mantener sus normas anti-dumping al margen de las disciplinas de la OMC, anunció en junio que, al no haber acuerdo entre los Miembros de la OMC, no apoyaría negociaciones sobre política de competencia.

Transparencia en contratación pública: Una divisoria similar se observa en este tema, salvo que aquí EE.UU. apoya la negociación de un acuerdo. Quienes desean iniciar negociaciones observan que el futuro acuerdo sólo abarcaría la transparencia de las normas sobre contratación pública, no sobre acceso a mercados. Quienes se oponen (liderados por India, Pakistán y Egipto) argumentan que el Grupo de Trabajo sobre Transparencia en la Contratación Pública necesita más tiempo para comprender cabalmente las preocupaciones de los países en desarrollo. El grupo tiene el mandato de “desarrollar elementos que habrán de ser incluidos en un acuerdo adecuado”, pero hasta ahora los Miembros sólo han planteado un gran número de temas sin acordar los elementos que deben llevarse a la Conferencia Ministerial de Seattle.

Comercio y medio ambiente: La Unión Europea, Noruega y Suiza han presentado propuestas sobre este tema. En la reunión de junio, la UE reiteró su deseo de que el tema ambiental tenga un lugar destacado en la reunión de Seattle. Por su parte Noruega y Suiza plantearon, como temas que necesitan ser incluidos o clarificados, el ecoetiquetado, los procesos y métodos de producción y la relación entre las normas de la OMC y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.

EE.UU. junto con Australia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú y Filipinas hicieron un llamado para que se incluya la eliminación de los

subsidios a la pesca en la próxima ronda. Estos países suman un cuarto de la captura mundial de peces de mar.

Varios países en desarrollo advirtieron que no había necesidad de duplicar el trabajo del Comité de Comercio y Medio Ambiente, en donde estos temas deben considerarse. Los países en desarrollo en general ven en las relaciones entre comercio y medio ambiente como potenciales restricciones al comercio y proteccionismo verde, y por lo tanto se oponen a su inclusión en la nueva ronda. Argentina encuentra particularmente inaceptable el argumento de que la protección ambiental es uno de los aspectos de la ‘multifuncionalidad’ de la agricultura y que en consecuencia debe ser aceptada como una razón legítima para subsidiar la producción.

En un evento relacionado, el G-8 hizo un llamado en su reunión del 18 al 20 de junio a que las consideraciones ambientales sean tomadas “plenamente en cuenta en la próxima ronda de negociaciones de la OMC”, incluyendo “una clarificación de la relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y ciertos principios ambientales clave, y las normas de la OMC”.

Otras cuestiones: Hay ciertos temas que parecen haber quedado al margen en el proceso preparatorio. No hay propuestas formales sobre transparencia y participación pública en la OMC, si bien varios países, incluyendo Canadá, la UE y EE.UU. han indicado en otros contextos que una de sus principales preocupaciones es hacer a la OMC más permeable a la sociedad civil. Tampoco hay propuestas específicas sobre la cuestión de las relaciones entre temas laborales y las normas comerciales, y no está claro si se incluirán reformas al mecanismo de solución de diferencias.

<http://www.wto.org/wto/minist/seatmin.htm>

La página electrónica de la OMC ha habilitado una sección en la que pueden encontrarse todas las presentaciones no restringidas que los Miembros han hecho durante la preparación para la Conferencia Ministerial de Seattle. La supresión del carácter reservado de los documentos se hace a solicitud de los respectivos gobiernos. En la misma página electrónica hay una sección con notas de prensa, información para la acreditación de prensa y el procedimiento para la inscripción de las ONG en el evento.

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

En la reunión del 11 de junio del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), EE.UU. presentó un documento llamando la atención sobre las notificaciones de los Miembros relativas a productos agrícolas y alimenticios genéticamente modificados (G/TBT/W/115). El documento señala que se han hecho 11 notificaciones sobre este asunto en el marco del Acuerdo OTC (otras han sido presentadas en el marco del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias). De estas, sólo una fue hecha antes de 1996, cinco se presentaron en el período 1997-1998, y cinco normas sobre organismos genéticamente modificados (OGM) fueron notificadas en los primeros cinco meses de 1999. Esta tendencia, sugiere EE.UU., indica un “creciente debate nacional sobre la necesidad de normas técnicas”. Remarcando que “un importante intercambio comercial en una amplia variedad de productos agrícolas y alimenticios se vería afectado”, EE.UU. señala que las normas internacionales aplicables al etiquetado y otros aspectos de los productos genéticamente modificados “en general o no existen o sólo recientemente son objeto de un trabajo serio para abordarlas. EE.UU. concluye invitando a los Miembros a participar en el trabajo del Codex Alimentarius “para avanzar hacia normas internacionales relevantes”.

EE.UU. también presentó una propuesta de decisión sobre la transparencia de las normas internacionales (G/TBT/W/75/Rev.1) orientada a asegurar que los Miembros de la OMC “tengan tiempo y oportunidades adecuadas de participar en la discusión, elaboración y adopción de normas internacionales”.

Las observaciones sobre la tendencia a etiquetar los OGM posiblemente tengan la intención de allanar el camino para incorporar más firme-

Continúa en la página 10

Panel considera secciones 301-310 de la ley de comercio exterior de EE.UU.

Un Panel de solución de diferencias se encuentra examinando la compatibilidad con las normas de la OMC de las secciones 301-310 de la ley de comercio exterior de 1974 de EE.UU. La Unión Europea (UE) presentó el caso en medio de la disputa con EE.UU. sobre el banano, luego de que este último insistiera en su derecho de aplicar sanciones comerciales retroactivamente contra las exportaciones europeas cuando el Organo de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC las autorizó formalmente. La UE argumentó que “al imponer límites temporales específicos y estrictos dentro de los cuales se deben hacer determinaciones unilaterales e imponer sanciones, las secciones 306 y 305 de la ley no permiten que EE.UU. cumpla con las reglas del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) en situaciones en las que una decisión multilateral en el marco del ESD sobre la conformidad de medidas tomadas para aplicar recomendaciones del Organo de Solución de Diferencias no haya sido adoptada por el mismo”.

El 29 de junio, la UE defendió oralmente su caso ante el Panel. El siguiente es un extracto de los argumentos presentados sobre la naturaleza multilateral de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC.

- Para las Comunidades Europeas (CE), al mantenerse inalteradas las características esenciales de las Secciones 301-310 tras la entrada en vigor de los acuerdos de la OMC, EE.UU. ha violado el acuerdo histórico al que se llegó en Marrakech entre este país y los demás participantes en la Ronda Uruguay, entre ellos los principales interlocutores comerciales como la CE y los países en desarrollo.
- Ese acuerdo fundacional, ese *quid pro quo* básico, que se podría denominar el ‘negocio de Marrakech’, fue el siguiente: EE.UU. obtendría la certeza práctica de la adopción por el OSD de los informes de los Paneles y el Organo de Apelaciones y la autorización a los Miembros de suspender concesiones, a cambio del abandono completo y definitivo de su política de acción unilateral. El sistema *multilateral* de solución de diferencias pretendía proveer seguridad y certidumbre al sistema multilateral de comercio (cf. Artículo 3.2 del ESD) y la existencia de un sistema multilateral de solución de diferencias que garantice el ejercicio efectivo de los derechos, eliminaría la necesidad y la justificación de medidas unilaterales para lograr ese mismo propósito.
- El primer pilar del negocio de Marrakech se consolidó con el acuerdo alcanzado sobre la llamada regla del ‘consenso revertido’, que se establece para casos en los que se aplica una excepción a la regla general del ‘consenso positivo’ y permite la adopción de una decisión por el OSD a menos que haya consenso sobre *no adoptar* la decisión propuesta.
- El segundo pilar del negocio de Marrakech se implementó al insertar en el ESD el Artículo 23, titulado ‘Fortalecimiento del Sistema Multilateral’. Esta disposición se centra en cuatro obligaciones principales: (1) la obligación de recurrir al ESD cuando un Miembro busca resarcimiento por el incumplimiento de una obligación u otra nulificación o menoscabo de beneficios bajo cualquiera de los acuerdos incluidos; (2) la obligación de no hacer determinaciones sobre si hubo una violación salvo a través de la solución de disputas de acuer-

do con el ESD; (3) la *obligación* de que toda determinación sobre si hubo incumplimiento de una obligación u otra nulificación o menoscabo esté de acuerdo con las *conclusiones* de los Paneles u Organo de Apelación *adoptado* por el OSD, y (4) la *obligación* de obtener autorización del OSD antes de suspender concesiones.

- El negocio de Marrakech fue ratificado por el acuerdo entre los participantes en la Ronda Uruguay sobre la incorporación en el Acuerdo de Marrakech que Establece la Organización Mundial del Comercio de un nuevo requisito, contenido en el Artículo XVI.4 del acuerdo marco: “Cada Miembro asegurará la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones contenidas en los Acuerdos anexos.”
- El Artículo XVI.4 es un principio adicional fundamental del sistema legal de la OMC que rige las relaciones entre las leyes, reglamentos y procedimientos administrativos internos y las normas de la OMC que se aplican a más de la obligación general de derecho internacional público establecida en el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados: “Ninguna Parte puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento con un tratado”.
- La tarea principal del Panel es determinar si las Secciones 301-310 cumplen en forma y *sustancia* con los requisitos, inter alia, de las disposiciones fundamentales del Artículo 23 del ESD. Más aún, el Panel debe determinar si las Secciones 301-310 cumplen en forma y *sustancia* con los requisitos de las disposiciones fundamentales contenidas en el Artículo XVI.4 del Acuerdo de Marrakech.
- El Artículo XVI.4, si bien fue redactado con las Secciones 301-310 en mente, es de aplicación general. Las decisiones del Panel tendrán implicancias no sólo para las Secciones 301-310 sino también para la legislación interna relativa a la OMC de todos los Miembros en todas las áreas.
- La presunción básica que subyace las Secciones 301-310 es que, en cuanto expira un plazo establecido en el ESD, EE.UU. recobra su ‘libertad’ de tomar cualquier determinación unilateral u otra acción que estime apropiada. En otras palabras, EE.UU. ha adoptado su legislación con la convicción de que nada fundamental ha cambiado luego de Marrakech. Cree que la expiración de un plazo previsto en el ESD le da el derecho de adoptar determinaciones y medidas unilaterales en relación y en detrimento de cualquier otro Miembro de la OMC.

Las Comunidades Europeas reiteran que los participantes en la Ronda Uruguay acordaron en Marrakech que ya no hay *ninguna* posibilidad de adoptar *ninguna* determinación unilateral ni tomar *ninguna* medida unilateral por una supuesta violación de un acuerdo abarcado. Todos los Miembros de la OMC, incluyendo EE.UU., han asumido la obligación internacional *incondicional* y *sin calificaciones* establecida en el Artículo 23 del ESD de no revertir a determinaciones y medidas unilaterales. Este compromiso no está sujeto a la condición de que el proceso de solución de diferencias se complete dentro de los plazos establecidos en el ESD.

Continuado de la página 8

mente la biotecnología en las normas de la OMC durante las próximas negociaciones, algo que tanto este país como Canadá han anunciado está entre sus prioridades. Todavía no está claro si lo intentarán a través de notas interpretativas que fortalezcan las disposiciones sobre procedimientos de aprobación de productos y acuerdos de equivalencia en el marco del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, o a través de la negociación de un acuerdo separado sobre biotecnología.

En la misma reunión, Canadá criticó las propuestas de etiquetado de productos que contienen OGM; Brasil anunció que está realizando consultas internas sobre el tema; y la India indicó que todo alimento genéticamente modificado exportado a los países en desarrollo que no cuente con instalaciones adecuadas para realizar análisis debería estar claramente etiquetado.

La disposición 1139/98 de la Unión Europea fue nuevamente criticada en la reunión. Esta regulación requiere que los productos que contengan soja o maíz genéticamente modificados sean etiquetados como tales. EE.UU. y Canadá expresaron su insatisfacción con el fundamento científico sobre el que la UE basa la distinción entre productos genéticamente modificados y los otros, y señalaron que todavía no ha respondido satisfactoriamente a sus preocupaciones sobre la aplicación de la disposición. Ambos países sostienen que sería muy difícil – y demasiado costoso – examinar rastros de DNA genéticamente modificado en los productos, y temen que la disposición de la UE conduzca a una obligación de facto de separar cadenas de cultivo, transporte y producción de maíz y soja genéticamente modificados. Ambos países mezclan sus cultivos transgénicos con otros y sostienen que no hay razones científicas para proceder de otro modo.

Discusiones en el Comité de Agricultura anticipan negociaciones en la Ronda del Milenio

Si bien el Comité de Agricultura de la OMC no es un foro de negociaciones, sus reuniones informales sirven para plantear posiciones y propuestas, muchas de las cuales son luego llevadas al proceso preparatorio de la Conferencia Ministerial de Seattle. En una de estas reuniones a finales de junio, los Miembros discutieron un documento presentado por Mauricio sobre 'El papel multifuncional de la agricultura en los pequeños estados insulares en desarrollo', que contiene varias 'preocupaciones no comerciales' de pequeñas economías dependientes de un solo cultivo, como el azúcar en el caso de Mauricio. La Unión Europea, Noruega, Japón y Corea – que evocan con frecuencia la naturaleza 'multifuncional' de la agricultura como justificación para los subsidios al sector – así como los países del Caribe expresaron su apoyo al documento.

Argentina, miembro del Grupo Cairns de países agroexportadores, recomendó a Mauricio no unirse a los intereses proteccionistas, señalando que son los subsidios y el proteccionismo de la UE los que le han permitido convertirse en un gran exportador de azúcar, dañando la economía de Mauricio y otros países menos desarrollados al deprimir los precios. Otros países, incluyendo EE.UU., indicaron que en lugar de utilizar el argumento de la multifuncionalidad, las preocupaciones de Mauricio podrían atenderse ya a través de subsidios existentes o no distorsivos (de 'caja verde') compatibles con la OMC, o a través del trato especial concedido a los pequeños países en desarrollo. India duda que el enfoque actual de 'caja verde' plantee los problemas que enfrentan los países en desarrollo.

Otro documento que generó divergencias fue el presentado por Cuba, la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Pakistán sobre los problemas del acceso a los mercados de los países desarrollados, entre los que se encuentran los altos aranceles a productos sensibles, la progresividad arancelaria y las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias. El documento fue apoyado por varios países en desarrollo.

Japón propone grupo de negociación independiente

El 25 de junio Japón presentó un documento al Consejo General sobre las próximas negociaciones agrícolas, proponiendo la creación de "un

grupo independiente para las negociaciones agrícolas (...) en vista de las características particulares de la agricultura, que exigen a los Miembros de la OMC considerar un amplio espectro de temas, tales como la ayuda interna, medidas en la frontera y reglas de exportación, de manera más completa posible" (WT/GC/W/220). El documento propone el desarrollo de disciplinas justas y equitativas para países importadores y exportadores de alimentos, así como para países desarrollados y en desarrollo, que permitan la "coexistencia de varios tipos de agricultura". Al enfatizar la 'multifuncionalidad' de la agricultura, Japón llama a negociaciones que tomen en consideración las "diferencias en las condiciones naturales" y la necesidad de lograr seguridad alimentaria. De acuerdo con el documento, se debería establecer otro foro para abordar nuevos temas, incluyendo los organismos genéticamente modificados, desde una perspectiva amplia.

Otro documento del Japón sobre productos forestales y pesqueros (WT/GC/W/221) enfatiza que los mismos son "recursos naturales agotables". Las próximas negociaciones deberían "establecer un conjunto de reglas y disciplinas que contribuyan al uso sostenible de los recursos a través de la promoción de mecanismos adecuados de conservación y manejo de recursos". Para permitir un examen completo de "todos los factores relevantes (...) tomando debida cuenta de las cuestiones ambientales globales y temas de conservación y manejo de recursos", Japón propone el establecimiento de un grupo para productos forestales y pesqueros "independientemente de otros productos no agrícolas".

El documento además señala que las discusiones sobre el acceso al mercado de productos forestales deberían concentrarse en las "medidas en la frontera que facilitan la obtención de los beneficios públicos de los recursos forestales a través del mantenimiento y desarrollo de las industrias forestales y madereras tanto en países importadores como exportadores". En materia de productos pesqueros, las discusiones sobre acceso a mercados deberían orientarse al establecimiento de disciplinas sobre medidas en la frontera que desincentivan actividades pesqueras de flotas con banderas de favor que "causan la sobre-explotación de la población de peces como resultado de operaciones de pesca que ignoran medidas de manejo de recursos". El documento también nota que "los aspectos positivos de los subsidios pesqueros que contribuyen a la utilización sostenible de los recursos pesqueros deberían ser plenamente reconocidos".

Cuestionamientos a esquemas de subsidios

En una sesión formal del Comité de Agricultura del pasado 24-25 de junio, los Miembros discutieron algunas notificaciones. La Unión Europea y Brasil criticaron a EE.UU. por su decisión de incrementar sustancialmente el apoyo a los productores de soja. EE.UU. señaló que el apoyo total a lo largo de los años era menor a su compromiso consolidado de US\$20 mil millones. Para las últimas cosechas el apoyo alcanzó los US\$450 millones y US\$139 millones; este año los productores de soja recibirán US\$2 mil millones y medio en un programa que representantes de la UE dicen redundante en subsidios por productor mayores a los existentes en los esquemas de apoyo de la UE.

Otras

Quienes están interesados en las discusiones agrícolas en la OMC tendrán que seguir esperando a que se flexibilice el proceso de supresión del carácter reservado de documentos: México se volvió a oponer a la supresión del carácter reservado de documentos preparados por la Secretaría para el proceso informal de análisis e intercambio de información del Comité. Los documentos sólo contienen datos fácticos y se compilan de notificaciones no restringidas. Varios Miembros, así como funcionarios de la Secretaría, solicitaron a México que recapacite, señalando que estos documentos pueden ser útiles para los gobiernos de los países en desarrollo y organizaciones como la FAO y UNCTAD que tienen programas de asistencia.

Continúa en la página 15

Cumbre América Latina y el Caribe y la Unión Europea: compromisos para el próximo siglo

El pasado mes de junio se celebró en Río de Janeiro la Primera Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea, donde se discutieron temas políticos, económicos, comerciales y educativos, culturales y sociales en un esfuerzo por fortalecer el diálogo y desarrollar una asociación estratégica entre las dos regiones con miras al siglo XXI. En la reunión estuvieron presentes los Jefes de Estado de varios países latinoamericanos y el Caribe, el Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo, Gerhard Schröder (Primer Ministro de la República Federal Alemana). La iniciativa para esta Cumbre surgió en la XI Cumbre del Grupo de Río en agosto de 1997 con el impulso del Presidente de Francia y del Presidente del Gobierno Español, para reforzar los distintos diálogos existentes entre ambas regiones.

La Unión Europea (UE) es el segundo socio comercial más importante de América Latina, después de EE.UU. En 1997 la UE importó de la región US\$38,065 millones, mientras que exportó US\$52,392 millones¹. Mercosur en particular es beneficiario de las inversiones directas europeas en varios sectores. La UE impulsó y aprovechó esta Cumbre para fortalecer sus alianzas con América Latina y el Caribe (ALC) en un esfuerzo por no quedar al margen de procesos de integración regional como el ALCA y la expansión del TLCAN. Al impulsar esta Cumbre, la UE demostró en cierto grado la importancia de ALC en la agenda comercial internacional europea. A su vez, para América Latina y el Caribe esta Cumbre permitirá aumentar las alternativas económicas y políticas, más allá de las que pueda ofrecer el ALCA, y en el caso de México, el TLCAN. Además, la Cumbre abrió puertas para que ambas regiones discutan y desarrollen posiciones comunes para fortalecer su poder de negociación en foros comerciales multilaterales como la OMC.

Sin embargo, existen dos factores que obstaculizan el mejoramiento en las relaciones comerciales UE-ALC: primero, el hecho de que las importaciones de productos latinoamericanos al mercado europeo son principalmente de materia prima agrícola y además constituyen un porcentaje muy bajo de la economía europea (p.ej. Mercosur constituye el 3% del comercio de la UE, mientras que la UE constituye una cuarta parte del comercio total de Mercosur)²; segundo, el proteccionismo europeo en el sector agrícola, marcado incluso hasta poco antes de la Cumbre por la oposición de los agricultores franceses a conceder el mandato de negociación a la Comisión Europea. Ambos factores ponen en duda que los europeos puedan ofrecer mejores condiciones para el libre comercio entre ambas regiones, al menos para los países de Mercosur y la Comunidad Andina. Después de todo, el sector agrícola ha sido de gran importancia económica y socio-cultural para la UE y ALC es un socio comercial relativamente pequeño. Un elemento importante también a considerar respecto al interés europeo en ALC, son las prioridades que surjan a partir de las negociaciones en la Ronda del Milenio. Muchas de las conversaciones de integración birregional UE-ALC dependerán de las negociaciones que se lleven a cabo entonces.

A pesar de estos obstáculos y, como se mencionó anteriormente, la UE no está dispuesta a dejar que sus relaciones con ALC se vean erosionadas en otros acuerdos regionales y ALC puede aprovechar este interés para reforzar su posición frente a otros bloques o países como EE.UU.

Desarrollo sostenible

Los compromisos que surgieron de la Cumbre, incluyendo los referentes al desarrollo sostenible, se resumen en una declaración política, la "Declaración de Río de Janeiro". También se elaboró un plan de acción, "Prioridades para la Acción", para el cumplimiento de estos compromisos.

La Declaración aborda el tema del desarrollo sostenible principalmente bajo el aspecto político de la reunión y presenta los siguientes compromisos:

- Intensificar los esfuerzos para atender las necesidades de las generaciones presentes y futuras mediante la adopción y el cumplimiento de estrategias de desarrollo sostenible, haciendo compatibles el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el progreso social.
- Dar prioridad, en el marco de la promoción del desarrollo sostenible a la superación de la pobreza, la marginalidad y la exclusión social, así como a la modificación de los patrones de producción y consumo, al fomento de la conservación de la diversidad biológica y del ecosistema global, el uso sostenible de los recursos naturales, y la prevención y reversión de la degradación ambiental, especialmente aquella derivada de la excesiva concentración industrial e inadecuados modelos de consumo, como también la destrucción de los bosques y la erosión del suelo, la disminución de la capa de ozono y el aumento del efecto invernadero, que amenazan al clima mundial.
- Promover niveles adecuados de inversiones y transferencia de tecnología para poner en práctica la amplia gama de acciones propuestas internacionalmente para la promoción del desarrollo sostenible.

En el ámbito económico y comercial, caben destacar los siguientes compromisos establecidos en la Declaración de Río :

- Destacar la importancia de la OMC como el foro principal para fomentar la liberalización del comercio y el establecimiento de las reglas y directrices básicas para el sistema internacional de comercio.
- Proponer conjuntamente, en la próxima reunión Ministerial de la OMC, el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones comerciales de naturaleza integral sin exclusión de ningún sector, dirigida a reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios.
- Apoyar el fortalecimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual en todos los sectores como condición importante para aumentar los flujos de comercio e inversión.
- Estimular la transferencia de tecnología a fin de mejorar los procesos y normas de vinculación económica entre la UE y ALC en las áreas de producción de bienes, comercio exterior, infraestructura portuaria, telecomunicaciones y transporte.

Según el plan de acción, estos compromisos se deben promover e impulsar a través de los actuales foros ministeriales entre la UE y ALC (p.ej. el Grupo de Río). Además, se estableció un Grupo Birregional de alto nivel el cual impulsará y dará seguimiento a la concreción de las prioridades establecidas en la Declaración de Río de Janeiro y ayudará a fortalecer la asociación estratégica birregional en todas sus dimensiones incluyendo lo económico, político, social, cultural y ambiental.

Reuniones paralelas

Durante la Cumbre se realizaron varias reuniones paralelas, entre las que caben destacar:

UE-Mercosur y UE-Chile. Las reuniones sirvieron para reafirmar el Acuerdo marco de Cooperación de 1995 entre UE y Mercosur y de 1996 entre UE y Chile. Las partes reiteraron su deseo de fortalecer sus relaciones económicas y comerciales, políticas y sociales, basadas en la democracia, el desarrollo sostenible y el crecimiento económico acompañado de justicia social.

¹ IRELA, basado en estadísticas del Fondo Monetario Internacional, 1997.

² "La lógica de la convocatoria de la Cumbre". Seminario "Diálogo para el Milenio", 7-8 de junio de 1999, Río de Janeiro.

Codex Alimentarius: Normas de seguridad alimentaria para el comercio global

La Comisión del Codex Alimentarius se reunió en Roma del 28 de junio al 3 de julio para considerar una serie de temas de potencial importancia para el comercio internacional. Entre las decisiones adoptadas se acordó que la Comisión comience a trabajar sobre normas relativas a alimentos derivados de la biotecnología, para lo cual se estableció un órgano subsidiario que tendrá su sede en Japón. También se formularon recomendaciones sobre la aplicación del análisis de riesgo al desarrollo de las normas del Codex, y sobre formas de mejorar las relaciones con las organizaciones no gubernamentales internacionales. La Comisión fue establecida en 1962 para recomendar normas mínimas de seguridad alimentaria para proteger la salud pública y asegurar prácticas comerciales justas en el comercio de productos alimenticios.

Si bien las empresas agrícolas y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la seguridad alimentaria han seguido la evolución del Codex durante años, el público en general ignoraba la existencia de la Comisión hasta hace poco. El establecimiento y la creciente autoridad de la OMC han revitalizado la importancia de las normas del Codex, ya que el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias reconoce que las medidas comerciales que se basen en el mismo serán consideradas como necesarias para proteger la salud humana y compatibles con la OMC. Las normas del Codex Alimentarius son en consecuencia cada vez más relevantes en la resolución de disputas en la OMC sobre este tipo de medidas comerciales.

Ciencia vs. política

Una consecuencia de este renovado papel en el comercio internacional ha sido que la toma de decisiones en el Codex se ha politizado. Si bien un sistema comercial transparente y no discriminatorio requeriría de la mejor asesoría científica posible, los gobiernos se esfuerzan por influir sobre recomendaciones que podrían afectar miles de millones de dólares en comercio. Más aún, las organizaciones de defensa de consumidores que han dado seguimiento a las deliberaciones del Codex han sostenido durante años que los intereses comerciales agrícolas y farmacéuticos han estado desproporcionadamente representados en las delegaciones del Codex.

Los procedimientos de toma de decisiones del Codex no ayudan. La Comisión y sus sub-comités deben adoptar normas por consenso pero, a falta del mismo, una simple mayoría basta. En el caso de la carne con hormonas, la UE argumenta que su restricción sobre carne tratada con seis hormonas que estimulan el crecimiento está justificada en parte porque las normas del Codex para las hormonas en cuestión fueron adoptadas por un estrecho margen, lo que indica que el tema es controvertido. En vista de su condición cuasi-legal en los Acuerdos de la OMC, el Comité del Codex sobre Principios Generales ha estado considerando formas de hacer que las normas del Codex gocen de mayor aceptación mundial.

Sin embargo, en su reunión de abril en París, el Comité no logró acordar cambios en la regla de la simple mayoría por una de dos tercios cuando no se logra consenso. Australia advirtió que una mayoría de dos tercios demoraría los procedimientos del Codex y volvería más difícil la propuesta de nuevas normas o la modificación de las existentes. El Comité sobre Principios Generales tampoco pudo acordar el papel de "otros factores legítimos" aparte de la ciencia (como consideraciones ambientales y preocupaciones de los consumidores) en la determinación de las normas.

El debate sobre etiquetado es un buen ejemplo de la naturaleza política del proceso de toma de decisiones en el Codex sobre normas

de seguridad alimentaria con impactos significativos en el comercio. El Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos culminó su última reunión el 30 de abril en Ottawa profundamente dividido sobre la adopción de recomendaciones sobre etiquetado de alimentos procesados que contienen organismos genéticamente modificados.

Una propuesta de etiquetado obligatorio fue vetada por EE.UU., Canadá y Argentina. Junto con otros productores agrícolas, estos países también han desafiado en el Comité de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, la norma de la UE que exige el etiquetado de alimentos que contienen cantidades rastreables de DNA de soja y maíz genéticamente modificado.

En tanto esos países cuestionan la viabilidad y la necesidad de la norma de la UE, organizaciones de consumidores en Europa y otras partes apoyan el etiquetado, y muchos miembros de la OMC están considerando la adopción de esquemas de etiquetado al menos voluntarios. Los gobiernos acordaron en Ottawa establecer un grupo de trabajo para desarrollar más propuestas para la próxima reunión anual del Comité, pero algunos observadores dudan que el grupo de 23 miembros pueda encontrar compromisos aceptables para todos.

Preocupaciones de los países en desarrollo

La inclusión en los Acuerdos de la OMC del requisito de que las medidas y normas comerciales relativas a la salud deben basarse en consideraciones científicas sólidas fue pensada como una forma de proteger a los países en desarrollo contra las barreras proteccionistas disfrazadas de medidas necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal. Se pensó que la necesidad de justificar tales barreras con evidencia científica disuadiría a los países desarrollados de restringir el acceso a sus mercados.

En la práctica, el combate entre la ciencia y el principio precautorio se libra en gran medida entre economías desarrolladas. Argumentando que las normas del Codex crean (en vez de eliminar) barreras comerciales a sus exportaciones, al no ser suficientemente flexibles para tomar sus condiciones particulares en consideración, muchos países en desarrollo han solicitado asistencia técnica para cumplir con las normas existentes y realizar evaluaciones de riesgo.

Adicionalmente, la presencia de estos países en las reuniones del Codex – y por lo tanto sus aportes en la elaboración de las normas – es insuficiente. Los miembros del Codex, al igual que el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, incentivan una mayor participación de los países en desarrollo en los Comités y los paneles asesores científicos como una prioridad en la búsqueda de una aceptación universal de las normas del Codex – pero todavía falta financiamiento para solventar esa participación.

Esta situación se hace más complicada por el hecho de que muchos Miembros de la OMC no aceptan las normas del Codex y en consecuencia los países en desarrollo deben cumplir con diversos exenciones nacionales aplicados por sus interlocutores comerciales. En algunos países industrializados la resistencia a las normas del Codex es coordinada por organizaciones de consumidores que temen que éstas no ofrezcan el mismo nivel de protección que la legislación nacional.

Más información sobre la Comisión y el Codex Alimentarius puede encontrarse en el sitio web de la FAO – www.fao.org.

Organos subsidiarios de la Convención Marco sobre Cambios Climáticos se reúnen en Bonn

El X Período de sesiones de los Organos Subsidiarios de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y de Ejecución (OSE) de la Convención Marco sobre Cambios Climáticos (CMCC), se llevó a cabo en Bonn, entre los días 31 de mayo y 11 de junio.

La reunión de Bonn se caracterizó por su tinte técnico y la profundización de diferencias entre los bloques de países a medida que se avanza en el detalle de los análisis. Así, las diferencias de concepto e interés dentro del G77/China fueron en esta ocasión más evidentes al tratar aspectos específicos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), tales como el comercio de los Certificados de Reducción de Emisiones, el fondo de adaptación, etc.

Entre los temas de mayor atención de los negociadores y de interés de la región se incluyeron:

Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés). Este tema es de gran trascendencia para la región. Las incertidumbres científicas y diferencias de intereses regionales y nacionales existentes, han conllevado a un acuerdo de que cualquier decisión que se tome en el futuro se sustente en el Informe Especial que entregará el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos (IPCC, por sus siglas en inglés) en mayo del 2000. Para facilitar el análisis del tema, se decidió que el IPCC presente un informe preliminar en octubre durante la undécima reunión de los Organos Subsidiarios, se realice un taller entre junio y noviembre del próximo año con el fin exclusivo de analizar el informe final del IPCC y, de esta manera apoyar y sustentar la toma de decisiones en la COP 6 a realizarse a finales del 2000.

Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Poco o nada se ha hecho para cumplir con los compromisos de los países desarrollados en esta materia. Hasta el momento se lleva adelante un proceso de consulta sobre el cumplimiento con el artículo 4.5 de la CMCC. Adicionalmente se decidió organizar tres talleres regionales para continuar con el proceso consultivo.

Compensación para los Países en Desarrollo. En la COP 5 que se realizará en noviembre de este año, se determinarán las medidas iniciales para abordar el cumplimiento de los artículos de la Convención y del Protocolo de Kioto que existen sobre la materia, tomando en consideración los resultados del taller a ser realizado en septiembre, cuya agenda fue aprobada en Bonn. Posteriormente, la COP 6 tomará las medidas adicionales que crea conveniente para el cumplimiento de los artículos.

Cumplimiento del Protocolo de Kioto. El Grupo de Trabajo Conjunto, establecido por la COP 4, aprobó en Bonn un Programa de Trabajo que guiará todas las reuniones hasta llegar a cumplir con las tareas encomendadas, entre las cuales se incluye la definición de un Sistema de Cumplimiento. También se decidió organizar un taller de consulta, no de negociación, donde se trate el intercambio de información relacionada con experiencias relevantes en otras convenciones y se genere un intercambio informal de criterios sobre el cumplimiento.

Mecanismos del Protocolo de Kioto. El G77/China, luego de varios días de deliberaciones, adoptó un documento que, junto con otros preparados anteriormente, servirá de base para un nuevo consolidado a ser elaborado por los Presidentes de los Organos Subsidiarios con el apoyo de la Secretaría. Cabe recordar que la COP 6 deberá tomar decisiones al respecto, en concordancia con el Plan de Acción de Buenos Aires.

Plan de acción de fomento de capacidades de los países en desarrollo en actividades relacionadas con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La Secretaría presentó un Plan que abarca cinco puntos: introducción, cuestiones y agentes, prioridades de la creación de capaci-

dades antes de la COP 6, recursos necesarios y medidas propuestas. Con las acotaciones vertidas en la reunión, la Secretaría elaborará una nueva propuesta que incluya opciones para la coordinación y orientación y la presentará a la siguiente reunión de los Organos Subsidiarios.

También es menester destacar que en Buenos Aires y en esta ocasión en Bonn, quizás por primera ocasión se abrió un proceso completamente informal de análisis y discusión de temas de interés de los países latinoamericanos, especialmente sobre el MDL. Fruto de ello surgió la idea, que cada vez cobra mas fuerza, de una Fase Temprana del MDL.

Finalmente cabe resaltar el impulso que está recibiendo el tratamiento de aspectos relativos al MDL en la región, y específicamente sobre el tema LULUCF. Así, la Reunión de Ministros de Medio Ambiente y Bosques de los Países Amazónicos sobre el MDL realizada a mediados de junio en Bolivia, y que contó con la participación de Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador acordó: "Recomendar la inclusión de los proyectos forestales en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, incluyendo las actividades de forestación, reforestación, restauración y manejo sostenible de los bosques naturales. Recomendar el análisis de la inclusión de la conservación de los bosques naturales con el requisito de que éste tipo de proyectos no sea elegible para ser implementado entre países del Anexo I".

Preparado por Luis Cáceres, Coordinador Nacional sobre Cambio Climático, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador.

Reparto de beneficios y los ADPIC

La Reunión Intersesional sobre la Aplicación del Convenio de Diversidad Biológica se realizó del 28 al 30 de junio luego de la reunión del Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. En representación del Grupo Africano, Mali sugirió negociar un protocolo sobre el acceso a recursos genéticos y el reparto de los beneficios de los mismos. Además de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, el reparto equitativo de los beneficios es uno de los tres pilares del CDB. De acuerdo a la propuesta de Mali, el nuevo protocolo debería reflejar el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO, el cual está actualmente siendo revisado con el objeto de armonizar la administración de germoplasma bajo control de la FAO con las disposiciones del CDB (ver *Puentes* Vol. 1 No. 5). Sin embargo, en general, esta propuesta no fue apoyada.

Los Delegados prefirieron concentrarse en la redacción de un nuevo programa de trabajo para el Panel de Expertos en Acceso y Reparto de Beneficios que se reunirá por primera vez en octubre de 1999 en Costa Rica. Entre los asuntos que se recomendaron para tratar en el programa de trabajo del nuevo Panel se encuentran "el acceso y reparto de beneficios con propósitos científicos y comerciales, incluyendo la revisión de acuerdos contractuales ya existentes de acceso y reparto de beneficios" así como la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual y los sistemas *sui generis*.

La relación entre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC y el CDB fue un tema separado que mereció comentarios enérgicos. México, junto a otros países en desarrollo, subrayó la importancia de los sistemas *sui generis*, la protección de la biodiversidad y los derechos que da la soberanía sobre los recursos biológicos. El Grupo Africano e India resaltaron el peligro que los ADPIC podrían significar para los derechos de los campesinos y a la aplicación del CDB. Camerún sugirió solicitar al Consejo de los ADPIC que deroguen las decisiones de revisar la exclusión de patentes hasta después de la Conferencia de las Partes en mayo del 2000, y recomendó invitar al Consejo para emprender discusiones respecto a posibles conflictos sobre las variedades de plantas y el derecho de los países a excluir plantas, animales, microorganismos y cualquier parte de los mismos, además de procesos microbiológicos para la producción de animales y plantas.

Continúa en la página 14

Noticias Regionales, continuado de la página 11

También acordaron celebrar reuniones del Consejo de Cooperación en noviembre de 1999, donde se formularán propuestas para “la definición de la estructura, metodología y calendario de las negociaciones”.

UE-Comunidad Andina. Los bloques intercambiaron opiniones sobre el progreso de los respectivos esquemas de integración y los efectos positivos del sistema general de preferencias concedido por la UE a la CAN bajo el contexto de la lucha contra el narcotráfico. En este sentido la CAN se pronunció interesada en mantener este sistema hasta el año 2004. La CAN también mostró su disposición de empezar negociaciones para establecer una zona de libre comercio entre ambos bloques.

Foro paralelo de la sociedad civil. El “Foro de la sociedad civil para el diálogo Europa, América Latina y el Caribe”, organizado por varias organizaciones sociales y sindicales de las Américas se realizó paralelamente a la Cumbre. En su Declaración de Río de Janeiro, el Foro denuncia la marginación de la sociedad civil de la región en las decisiones oficiales y la falta de transparencia del proceso. Afirman que no se puede justificar el no haber incorporado a representantes de la sociedad civil en esta Cumbre de envergadura internacional, lo cual empaña la legitimidad de las decisiones adoptadas en los encuentros oficiales. El Foro también afirma que la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas vitales se encuentran amenazados por la lógica del crecimiento económico y por la desregulación comercial en la medida que ésta facilita el acceso al consumo irracional de los recursos naturales. Concluyen además que el libre comercio contradice la promoción del desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria, por lo que la cooperación entre la UE y ALC debe establecer límites sociales y ambientales para el crecimiento basándose en la sustentabilidad y la equidad.

La Segunda Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea se realizará en España en el 2002.

Se aprueban modificaciones a directrices del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte

El pasado 28 de junio, se reunieron en Banff, Canadá, las tres Ministras del Medio Ambiente de México, Estados Unidos y Canadá, para celebrar la sesión anual del Consejo de Ministros de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). Dicho Consejo, está integrado por Julia Carabias, Carol Browner, y Christine Stewart. Durante la celebración de la reunión, entre otros asuntos, las Ministras aprobaron reformas y adiciones a las “Directrices para la presentación de peticiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental conforme a los artículos 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte” (ACAAN).

Dichas reformas y adiciones establecen algunos procedimientos y obligaciones adicionales para el Secretariado de la CCA ante el Consejo de Ministros y el Peticionario, lo cual implica más trabajo y tiempo para cumplir con las disposiciones establecidas. En algunos casos, las reformas no ofrecen criterios claros sobre los cuales la Secretaría debe actuar.

Según algunos observadores, las reformas no se justifican en virtud de la Consulta Pública llevada a cabo por el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la CCA durante 1998 y 1999. No obstante lo anterior, desde la perspectiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), los cambios efectuados pueden considerarse como menores y no ponen en riesgo la participación de la sociedad para poder utilizar este instrumento jurídico-ambiental internacional. Adicionalmente, el CEMDA percibió durante el proceso que en un principio se pretendía, particularmente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca de México (SEMARNAP), acotar las facultades que el Secretariado ejerce de conformidad con el Acuerdo, lo que podría derivar en hacer el procedimiento más difícil de acceder para la ciudadanía.

Para mayor información comunicarse con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Tel: (525) 553-9975 / 211-2457 / 286-3323, fax: 211-2593, e-mail: cemda@laneta.apc.org

Foro regional sobre legislación ambiental en Centroamérica

Del 7 al 10 de julio pasados se realizó en San Salvador el Foro Regional sobre “La gestión ambiental, oportunidades y limitaciones para la producción y comercialización agropecuaria en Centroamérica”, organizado por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comisión Centroamericana de Comercio, Ambiente y Desarrollo (CCAD). El objetivo del evento fue el apoyar el desarrollo de la agenda centroamericana sobre comercio y medio ambiente.

Este Foro fue organizado dentro del contexto de un proyecto global para el establecimiento de una red de conocimiento sobre el comercio. Dicho proyecto es desarrollado por el International Institute for Sustainable Development (IISD) en Canadá, el International Development Research Center (IDRC) en Canadá y la UICN-Unión Mundial para la Naturaleza en Suiza, y tiene como objetivo principal crear capacidad en países y regiones en vías de desarrollo, realizando investigaciones y estudios de caso, que permitan vincular los temas de comercio con el desarrollo sostenible y reflejar efectivamente esos intereses en la Organización Mundial del Comercio y otros foros multilaterales en donde las políticas de comercio son discutidas o negociadas.

Para mayor información, contactar a: Vicky Cajiao del Centro de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales (CEDARENA). Tel: (506) 283-7080, fax: 224-1426, e-mail: cedarena@sol.racsa.co.cr, o consultar la página electrónica de la CCAD: www.ccad.org.gt

AMUMA, continuado de la página 13

La decisión final sobre el asunto (UNEP/CBD/ISOC/L.4) enfatiza la importancia de explorar las implicaciones de los derechos de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y el reparto equitativo de los beneficios, y hace un llamado urgente para que la Secretaría del CDB obtenga la condición de observador en el Consejo de los ADPIC. La próxima Conferencia de las Partes debería considerar la conveniencia de invitar a la OMC a tomar en cuenta las disposiciones pertinentes del CDB y de explorar la relación entre los ADPIC y el CDB, particularmente en lo que se refiere a los derechos de comunidades indígenas y a los sistemas de protección *sui generis*. La decisión también hace un llamado a los gobiernos para que sigan de cerca el trabajo realizado por la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la protección de propiedad intelectual con relación a conocimientos tradicionales.

Para mayor información contactar a: Secretaría del CDB. Tel: (1-514) 288-2220, fax: 288-6588, e-mail: secretariat@biodiv.org, página electrónica: www.biodiv.org.

Propuesta de EE.UU. sobre comercio de productos forestales recibe críticas en casa

La oposición a la eliminación de aranceles en el comercio de productos forestales crece rápidamente en EE.UU. El 23 de julio unas 16 organizaciones ambientalistas solicitaron a la Representante para las Cuestiones Comerciales Internacionales, Charlene Barshefski, que EE.UU. retire su apoyo a la iniciativa. Cinco días más tarde, 48 congresistas escribieron al Presidente Clinton expresando su preocupación por los impactos ambientales que la eliminación de estos aranceles podría tener, así como por la falta de transparencia en el desarrollo de la posición negociadora del gobierno. Ambos mensajes expresan que la reducción de aranceles aceleraría la deforestación y solicitan al gobierno estudiar los impactos ambientales de la liberalización comercial antes de proceder con las negociaciones en el sector forestal.

En respuesta a estas preocupaciones, la Representante y el Consejo de Calidad Ambiental han iniciado un análisis de la iniciativa y están recibiendo comentarios del público sobre sus ‘efectos económicos y ambientales’. Sin embargo, las organizaciones conservacionistas sostienen que no es posible realizar un análisis suficiente en el tiempo que resta antes de la Ministerial de Seattle, y por lo tanto llaman al gobierno a suspender su participación en las negociaciones sobre productos forestales hasta que tal análisis pueda ser completado.

Comercio y medio ambiente en los acuerdos regionales, continuado de la página 2

¿Una forma de encarar el debate multilateral?

Como se puede apreciar, la vinculación entre comercio y medio ambiente, al menos desde el punto de vista de la institucionalidad, está mucho más adelantada en los acuerdos comerciales regionales que en el plano multilateral. Esta realidad contrasta con el rechazo casi de plano que la mayoría de los países de América Latina expresan en la OMC, y lleva a reflexionar sobre las motivaciones y la posible evolución del debate. La menor conflictividad del tema en casi todos los acuerdos regionales respecto de lo que ocurre en la OMC, si bien explicable por muchos factores que diferencian ambos tipos de escenarios, sugiere que quizás el camino para vincular estas dimensiones pase por la evolución desde los acuerdos regionales hacia la integración en el contexto multilateral. En todo caso, la pregunta sobre la preparación de los países de América Latina para entrar en el debate multilateral de manera proactiva puede empezar a responderse desde este análisis.

Noticias OMC, continuado de la página 10

Comité de Comercio y Medio Ambiente

El Comité de Comercio y Medio Ambiente se reunió el 29 y 30 de junio para discutir las relaciones entre los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA) y la OMC. Representantes de las Secretarías de cinco AMUMA (la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, la Convención sobre Cambio Climático, el Protocolo de Montreal, CITES y el Foro Internacional sobre Bosques) informaron a los Miembros y respondieron preguntas.

Las discusiones se centraron en las relaciones entre las agendas multilaterales de medio ambiente y de comercio, incluyendo el papel de la solución de diferencias, la exportación de bienes cuyo uso está prohibido a nivel local, y la relación entre el Convenio de Diversidad Biológica y las disposiciones relevantes de los ADPIC.

La mayor parte de la discusión giró en torno al primer tema. Canadá enfatizó la necesidad de desarrollar regímenes más estrictos de aplicación de los AMUMA ya que, a pesar de existir normas de solución de diferencias, éstas no se han utilizado. Noruega señaló que las normas de la OMC y los AMUMA deben estar al mismo nivel, sin rangos jerárquicos, y que se debe asegurar que las normas de ambas se apoyen y sean legalmente consistentes, a lo cual la Comunidad Europea (CE) agregó que se debería evitar la interpretación de las normas de la OMC aisladamente de otras ramas de derecho internacional. La CE también señaló que para los países en desarrollo se debería establecer mecanismos internacionales de prevención de riesgos ambientales, por ejemplo en el movimiento transfronterizo de OVM; por lo tanto, la OMC debería acoger las medidas comerciales que se tomen para la aplicación de los AMUMA.

Por su parte, Venezuela, con el apoyo de Egipto y Costa Rica, dijo que las normas de la OMC ya ofrecen suficiente flexibilidad para medidas de protección ambiental, a lo que Hong Kong agregó que los AMUMA no se deberían utilizar como una puerta de salida para evitar los compromisos adquiridos con la OMC. EE.UU. recalcó la necesidad de una cláusula de previsión para aclarar las intenciones de las partes a un acuerdo en relación a otros acuerdos.

También se discutió sobre ecoetiquetado y los avances de la ISO en la normalización del mismo y sobre la participación de países en desarrollo en procesos de consulta. Se discutieron también los beneficios de reducir los subsidios que distorsionan el comercio pesquero. Frente a esto último, Nueva Zelanda presentó un documento invitando a los gobiernos a "comprometerse tempranamente a la eliminación progresiva de los subsidios a la pesca que contribuyen al exceso de capacidad pesquera, en vista de sus efectos nocivos para el medio ambiente y distorsivos del comercio, y a trabajar en la OMC para lograrlo" (WT/CTE/W/121). Este sería, según Nueva Zelanda, un caso en el que todos ganarían – el comercio, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Para más detalles, las memorias de la reunión fueron publicadas por la Secretaría en www.wto.org/wto/enviro/bulletin.htm.

PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES

buscan proveer información y análisis sobre la intersección entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate. El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y sus organizaciones asociadas reconocen el auspicio del Gobierno Federal Suizo (BAWI) para la publicación de Bridges y el de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur para Puentes y Passerelles.



INTERNATIONAL CENTRE FOR
TRADE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

BRIDGES Between Trade and Sustainable Development es publicado mensualmente por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Director: Ricardo Meléndez-Ortiz

Editora: Anja Halle

Editora asociada: Caroline Dommen

Dirección: 13 chemin des Anémones
1219 Ginebra, Suiza

Tel: (41-22) 917-8492

Fax: (41-22) 917-8093

E-mail: ictsd@ictsd.ch

Web: <http://www.ictsd.org>



PUENTES Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, la versión para América Latina de *BRIDGES*, es publicada bimestralmente en colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano.

Coordinador: Nicolás J. Lucas

Editora asociada: María Amparo Albán

Asistente editorial: Marijke Hallo de Wolf

Dirección: Casilla 17-17-558

Quito, Ecuador

Telefax: (593-2) 920-635/920-636

E-mail: flla2@fulano.org.ec



enda-tiers monde

PASSERELLES entre le commerce et le développement durable es la versión en francés de *BRIDGES*, publicada bimestralmente en colaboración con ENDA-Tiers Monde.

Coordinador: Taoufik Ben Abdallah

Dirección: B.P. 3370,

Dakar, Senegal

Tel: (221) 821-7037

Fax: (221) 822-2695

E-mail: syspro2@enda.sn

Web: <http://www.enda.sn>

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en *BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES* son exclusivas de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del ICTSD y las publicaciones. El material de estas publicaciones puede ser utilizado en otras publicaciones con una completa cita de su fuente.

Bridges Weekly Trade News Digest

Para suscribirse al resumen semanal en inglés del ICTSD de noticias comerciales relevantes para los interesados en Medio Ambiente y Desarrollo, por favor enviar un mensaje a: Majordomo@igc.apc.org. Dejar "subject" en blanco y en el cuerpo del mensaje escribir: subscribe tradedev. Para copias vía fax y correo, también contactar al ICTSD. También disponible en el sitio electrónico del ICTSD.

Todas las reuniones de la OMC se celebran en Ginebra. Las fechas están sujetas a cambios; rogamos ponerse en contacto con la OMC para confirmarlas. Todos los números de teléfono y de fax empiezan con (41-22) 739. Los números indicados en la lista a continuación corresponden únicamente a las extensiones. Internet: <http://www.wto.org>

| | | | |
|------------------|---|----------------|--|
| Septiembre 6-11 | Tercer Período de sesiones del Comité Internacional de Negociación sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Ginebra, Suiza Contacto: Jim Willis, UNEP Chemicals, Ginebra. Tel: (41-22) 979-9111, fax: 797-3460, e-mail: jwillis@unep.ch | Octubre 6 | Consejo General de la OMC Contacto: Paulo Barthel-Rosa, tel: 5095, fax: 5761 |
| Septiembre 15-16 | Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC Contacto: Matthijs Geuze, tel: 5418, fax: 5790 | Octubre 6-7 | Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la Contratación Pública de la OMC Contacto: Vesile Kulaçoğlu, tel: 5187, fax: 5790 |
| Septiembre 16-17 | Reunión ordinaria del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, Canadá Contacto: Manon Pepin, CEC. Tel: (514) 350-4305, fax: 350-4314, e-mail: mpepin@ccemtl.org , página electrónica: www.cec.org | Octubre 7 | Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC Contacto: Chiedu Osakwe, tel: 5250, fax: 5774 |
| Septiembre 17-18 | Curso sobre la "Participación de la sociedad civil en los procesos de integración regional y subregional en América Latina y el Caribe: experiencias compartidas", CEFIR, Montevideo, Uruguay. Contacto: CEFIR, (598-2) 336-4809/5232, e-mail: cefir@cefir.org.uy | Octubre 11-13 | Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC Contacto: Jorge Vigano, tel: 5078, fax: 5774 |
| Septiembre 20 | Comité de Normas de Origen de la OMC Contacto: Eki Kim, tel: 5584, fax: 5770 | Octubre 12-13 | Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC Contacto: Doaa Abdel Motaal, tel: 5875, fax: 5620 |
| Septiembre 20-21 | Consejo del Comercio de Servicios de la OMC Contacto: A. Hamid Mamdouh, tel: 5435, fax: 5771 | Oct. 24-Nov. 5 | V Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre los Cambios Climáticos, Bonn, Alemania Contacto: Secretaría del CMCC. Tel: (49-228) 815-1000, fax: 815-1999, e-mail: secretariat@unfccc.de , página electrónica: www.unfccc.de |
| Septiembre 24 | 3ra Conferencia de la Asociación Mundial de Derecho Comercial sobre el Debido Proceso en el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, Londres, Reino Unido Contacto: Cameron May Ltd. Tel: (44-171) 582-7567, fax: 793-8353, e-mail: conferences@cameronmay.com , página electrónica: www.cameronmay.com | Octubre 25-26 | Reunión de seguimiento de la Red de Funcionarios Sudamericanos sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Venezuela Contacto: Catalina Mosler, Coordinadora Regional de la Red, PNUMA ROLAC, Ciudad de México. Tel: (525) 202-4841, fax: 202-0950, e-mail: cmosler@latino.rolac.unep.mx |
| Septiembre 27 | Comité de Normas de Origen de la OMC Contacto: Eki Kim, tel: 5584, fax: 5770 | Octubre 28-29 | Reunión de técnicos especialistas y expertos en políticas sobre la "Expansión ambientalmente sana del comercio en las Américas", Dante B. Fascell North-South Center, Miami, Florida Contacto: Sherry Tross, Directora de Programas, North-South Center, Universidad de Miami. Tel: (305) 284-8974, fax: 284-6370, e-mail: stross@miami.edu |
| Septiembre 29-30 | Comité de Agricultura de la OMC Contacto: Paul Shanahan, tel: 5095, fax: 5760 | | |
| Sept. 30-Oct. 1 | Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la OMC Contacto: Vivien Liu, tel: 5455, fax: 5774 | | |
| Octubre 4-5 | Reunión de seguimiento de la Red de Funcionarios Centroamericanos y de países de habla hispana del Caribe sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, Nicaragua Contacto: Catalina Mosler, Coordinadora Regional de la Red, PNUMA ROLAC, Ciudad de México. Tel: (525) 202-4841, fax: 202-0950, e-mail: cmosler@latino.rolac.unep.mx | | |
| Octubre 4-8 | Reunión del Panel de expertos en acceso y reparto de beneficios, Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica. Lugar a ser determinado. Contacto: Secretaría del CDB, Montreal, Canadá. Tel: (514) 288-2220, fax: 288-6588, e-mail: chm@biodiv.org , página electrónica: www.biodiv.org | | |

PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS

CANTOS, Eduard. 1999. "El porqué del comercio justo". Icaria Editorial, Barcelona.

CHUDNOVSKY, D.; S. RUBIN; E. CAP y E. TRIGO. 1999. "Comercio internacional y desarrollo sustentable. La expansión de las exportaciones argentinas en los años 1990 y sus consecuencias ambientales". CENIT, Buenos Aires.

FARN-Fundación Ambiente y Recursos Naturales. (s/f). "Aspectos jurídicos relevantes a un régimen de acceso a recursos biológicos y a mecanismos de compensación. El caso de Argentina". FARN, Buenos Aires. Documento disponible en la página electrónica de la FARN: www.farn-sustentar.org/docs/

OEA. (s/f). "Compendio Analítico de los Acuerdos Comerciales del Hemisferio Occidental", versión revisada. OEA, Washington, DC. Documento disponible en la página electrónica de la OEA: www.sice.oas.org/

VALLEJO, Nancy; D. STONE (eds.). (s/f). "Measures to Control Access and Promote Benefit Sharing: a Selection of Case Studies". WWF International, Gland.

<http://www.wto.org/wto/minist/seatmin.htm> – nueva sección en la página electrónica de la OMC que contiene documentos relacionados al proceso preparativo de la Ministerial de Seattle, notas de prensa e información para la acreditación de prensa.

